

CORRIENTES: ARZOBISPO DETENIDO POR UN JUEZ

"Un sacerdote del «Tercer Mundo» ha pedido amparo. Es para proteger su persona y poder realizar el culto". Así rezaba el epígrafe de una breve noticia en "La Prensa" del 22 de marzo. En un primer momento, el hecho pasó casi desapercibido; tres días después emergía en la primera página de los diarios, persistiendo en la información periodística durante unas tres semanas para estupor de la "grey católica", como suele decirse en dichos medios. En realidad, la noticia fue estupefactiva también para los no-grey-católicos, que no terminan de comprender qué está ocurriendo en la Iglesia. Interesó al ámbito forense en general y a la justicia y gobierno de Corrientes en particular, los cuales no sabrán cómo sacar las castañas del fuego sin quemarse los dedos y sin provocar una crisis de las instituciones provinciales.

Nadie podrá negar el derecho de todo sacerdote, como ciudadano, a invocar el amparo de la Ley para proteger su persona. Pablo de Tarso, ciudadano romano, apeló al César y fue absuelto en Roma después de un proceso que duró cerca de tres años. Y después de él, muchos cristianos buscaron el amparo de las leyes como, por ejemplo, las que establecían la inviolabilidad de los cementerios (catacumbas).

Ahora bien, en el caso correntino, que nos interesa, el sacerdote **Raúl Oscar Marturet**, párroco de la iglesia de San Juan Bautista, señaló en su exposición ante el juez **Otero** que la policía ejercía permanente vigilancia sobre su prédica y demás funciones ministeriales. De ser cierta la denuncia, las fuerzas del orden merecerían un tirón de orejas, como lo recibió la Policía Federal hace muy pocos días de la sala V de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, por efectuar continuas inspecciones en el domicilio de

por
**IGNACIO
PEREZ DEL VISO**

un pacífico ciudadano, pues "la facultad de mantener vigilancia especial sobre sospechosos) debe ejercerse con tino y medida para que no agravie derechos constitucionales", según expresaba el juez en su fallo confirmado por la Cámara.

UN PROBLEMA DE INCOMUNICACION

El Padre Marturet adujo, como confirmación, expresiones del mismo señor arzobispo, quien le habría insinuado la posibilidad de trasladarlo con motivo de la presión policial. El juez Otero, por tanto, **requiere informes** al jefe de policía y al arzobispo, quienes responden, según la información, **negando los hechos que les atribuía el recurrente**. Y aquí comienza el desfase del asunto: el arzobispo se siente o aparece querellado igual que el jefe de policía. O hubo ambigüedad en el pedido de amparo hecho por el sacerdote o hubo extralimitación en el modo del pedido de informes requerido por el juez o hubo un malentendido de parte del arzobispo creyéndose querellado por su sacerdote. O tal vez algo de las tres cosas, obrando cada una como causa de la siguiente. Y todo esto nos trae a la mente algunas reflexiones.

En primer lugar, salta a la vista una cierta **incomunicación** entre el sacerdote y su obispo, una tierra de nadie en la que el juez viene a resultar el intermediario, aumentando así la incomunicación. El juez es, en cierto modo, un extraño a la comunidad cristiana y su intervención tendrá como efecto endurecer las posiciones por la natural aprehensión ante toda ingerencia foránea. Pretender reestablecer la armonía entre un obispo y un sacerdote mediante disposiciones judiciales es como querer servir de intérprete hablando una tercera lengua extraña a los interlocutores. Los hechos subsiguientes demostrarán este

aserto, cuando toda posibilidad de acuerdo entre el arzobispo y el sacerdote se vea radicalmente obstruida por un conflicto magnificado en el que los protagonistas serán nada menos que el gobernador y el superior tribunal de la provincia. Si la intención del juez fue correcta —como debemos suponerlo— al pretender que un sacerdote goce de la debida seguridad y libertad, sus métodos no resultaron tan adecuados, abandonando al sacerdote a la suerte de enfrentar una posible excomunión. No olvidemos, con todo, que el escándalo "legal" es un mero epifenómeno del hecho de una mayor o menor incomunicación, tanto en sentido vertical como horizontal, que padece nuestra Iglesia. No nos escandalicemos si tales hechos se repiten. El problema es muy profundo y no será solucionado de un día para otro aún con la mejor buena voluntad de todos. Nuestra Argentina políticamente desintegrada o desencontrada es un paradigma de lo que nos puede suceder en otros órdenes.

LIBERTAD DE CULTO

Una segunda observación nace del siguiente hecho: el sacerdote solicita amparo no sólo para proteger su persona sino también **para poder realizar el culto**. Y nos preguntamos: ¿quién es el último responsable del culto cristiano? De acuerdo a los documentos del Vaticano II, parece obvio que, a nivel universal, lo es el "collegium" de obispos en unión con el obispo de Roma, y, a nivel local, el obispo —secundado por su presbiterio— ofreciendo así, en una comunidad concreta, la Palabra de salvación que la Iglesia universal anuncia para todos los tiempos y lugares. El término "**Jerarca**", tan desprestigiado en expresiones como "los jefes del Kremlin", significa precisamente **autoridad sagrada**, sacerdote-jefe, digamos: último responsable del culto. Por otro lado, no somos sacerdotes o predicadores individuales del Evangelio —al menos en la concepción católica— sino sacerdotes de la comunidad cristiana. El Evangelio no es anunciado por los individuos creyentes sino por la comunidad. El mismo perdón de Dios, por ejemplo, es ofrecido sacramentalmente como una reincorporación a la comunidad cristiana. Y hay comunidad cristiana donde hay Eucaristía, presidida por el obispo, único que puede garantizar su celebración a lo largo de la historia, es decir, encomendando a otros el ministerio. Este hecho supera radicalmente la concepción liberal de "**libertad de culto**", entendida como garantía individual de predicción o práctica ritual, en el mismo

orden de otras libertades individuales: de pensamiento, de expresión, de tránsito, etc.

Sin negar, por tanto, el derecho de toda persona a la libertad de culto, la Iglesia ubica esa libertad en el plano de la comunidad y desde ésta interpreta la primera, tanto más cuanto que la libertad personal se refiere al culto privado y al público —si cabe esa distinción—, al culto individual y al comunitario, con derecho incluso al proselitismo ("jugando limpio") de acuerdo al principio de libertad religiosa enunciado por el Vaticano II. Cualquier limitación de cualquier creyente —y más si es sacerdote— afecta directamente a la comunidad cristiana y es ella la que debe reclamar el ejercicio del derecho. Incluso es la comunidad —no en sentido puramente democrático sino en sentido bíblico, como Pueblo congregado por la Palabra de Dios— quien debe juzgar del hecho de la restricción y de la oportunidad y modo de defender la libertad cultica. Ni es tampoco el obispo solo, "autocráticamente", quien vela por el ejercicio de la libertad cristiana; lo es el obispo en cuanto **pastor del Pueblo**, interpretando proféticamente sus deseos. Este parece ser el **ideal**. La realidad puede indicar casos de excepción en los que un simple sacerdote, o aún laicos, se vean en la necesidad de asumir una responsabilidad que ha quedado huérfana. Pero en la medida en que abusemos de los "casos de excepción" correremos el peligro de perder de vista el ideal hacia el cual debemos tender siempre. No nos atrevemos a emitir un juicio terminante sobre la solicitud de amparo promovida por un sacerdote con nombre y apellido. Sólo queremos llamar la atención sobre la grave responsabilidad de iniciativas individuales que comprometen a toda la comunidad cristiana desatando conflictos que escapan al control de los participantes, y llamar también la atención sobre la urgencia de solventar las causas que están llevando a más de un sacerdote a ese tipo de iniciativas personales. Actualmente ya ni siquiera cada obispo puede manejarse en base a iniciativas personales, como ocurrió en otros tiempos. Ni el obispo en su diócesis ni el sacerdote en su parroquia pueden ser considerados como una especie de señores feudales, vinculados sólo fronterizamente con otras diócesis o parroquias.

LA PRIMACIA DEL DERECHO CANONICO

Cuando el arzobispo negó los hechos que le atribuía el recurrente —si es que en verdad el arzobispo había sido mencionado por el sacerdote como querrelado

y no como simple testigo—, recordó al magistrado que, en esta materia, tiene primacía el Derecho Canónico. Un primer problema de método sería delimitar cuál es "esta materia", o cómo se la presentó el juez al arzobispo. Cuando no se delimita cuidadosamente la materia, se originan peligrosas confusiones y se da pie a la tradicional posición liberal que niega, a lo más tolera, y en lo posible restringe dicha primacía. Pero vayamos al preconcepto que sustenta la noción de primacía. "Primacía" de una parte o "subordinación" de la otra, suponen un conflicto de poderes o jurisdicciones. Que esos conflictos se dieron, lo demuestra la historia; y la misma historia nos muestra que, en general, tales situaciones se produjeron por extralimitación de uno o de ambos derechos, civil y canónico. Recién a partir del Vaticano II estamos en condiciones de elaborar hipótesis de trabajo sobre las relaciones Iglesia-Estado, liberadas de teorías que respondían a situaciones históricas muy peculiares, como la del "estado católico", y de presupuestos teológicos no claramente elaborados, como, por ejemplo, el de "tolerancia religiosa" (antepasado del de libertad religiosa).

Tal vez ahora se pueda decir que el **Derecho Canónico no tiene primacía sobre el civil**, no por estar subordinado a él sino por tener vigencia en otro orden de valores diferente al del derecho civil. Y esto valdría tanto para el derecho canónico como para cualquier reglamentación interna a una comunidad religiosa, sea cristiana, musulmana o judía. Al reconocer el Estado el derecho a la libertad religiosa está reconociendo implícitamente el derecho a la organización interna de cada comunidad religiosa, mientras no vulnere los derechos legítimamente reconocidos de otras comunidades. El problema de si un sacerdote o pastor o rabino predica correctamente de acuerdo a los Libros sagrados de su religión, escapa, por su naturaleza, a la competencia de la justicia, si no queremos transformar a ésta en el árbitro de las religiones. Pero el hecho de que un sacerdote **sea difamado** —como aducía el P. Marturet—, puede caer bajo la competencia de la justicia, en cuanto que la difamación es considerada delito. Pero difícilmente un juez podría determinar qué es "difamación" en materias de orden religioso sin solicitar la colaboración de las autoridades responsables de esa comunidad religiosa. Si un sacerdote querrela a alguien por difamación en materia de celibato eslesiástico, el asunto no ofrece mayores complicaciones, dado que puede ser considerado por el juez desde el punto de la moralidad individual en ge-

neral. En este caso, el testimonio del obispo sobre la integridad de vida del sacerdote es de sumo valor para desmentir una falsa acusación. Pero ese testimonio debería presentarlo el mismo sacerdote, como parte de la prueba, y no exigirlo el juez al obispo, dado que éste último podría tener sus razones para no pronunciarse sobre el hecho. Ahora comprenderemos mejor por qué, entre las preguntas que formuló el juez al arzobispo figuraba, según la información periodística, **la de si cumplía su celibato**. No se trataba necesariamente de una ingerencia de lo civil en lo religioso. Lamentablemente la pregunta estaba mal formulada. Hubiera parecido más correcta así: si el Señor Arzobispo tenía algo que declarar en la querrela que un sacerdote de su diócesis entablada contra terceros por difamación en lo referente a su celibato sacerdotal. Por desgracia, el arzobispo vino a quedar como querrellado como si él hubiera hablado mal de la integridad de vida del sacerdote, y el juez vino a resultar el árbitro del cumplimiento de la ley del celibato por parte de un sacerdote.

Esto nos permite insistir sobre una reflexión anterior: el honor de un sacerdote es, en cierto modo, el honor de toda la comunidad cristiana. La negligencia con que frecuentemente escuchamos acusaciones contra determinados sacerdotes —comunistas, guerrilleros, agitadores...— hace que la responsabilidad por defender el honor de esos sacerdotes vayan quedando en manos de ellos mismos; no podemos tirar la piedra sobre un sacerdote que se defiende como puede cuando ya lo hemos dejado prácticamente librado a su propia suerte. Pensemos, por ejemplo, en el sacerdote Pascual Rodríguez, tomado preso, incomunicado y en lugar desconocido —al menos al comienzo— para su propio obispo, al finalizar la huelga de El Chocón. ¿Quién se interesó por él en todo el país? La CGT interpuso un recurso, un sacerdote otro. Pero la Iglesia argentina dejó la impresión —aunque hubiera rezado mucho por él— de no estar dispuesta a un enfrentamiento con el gobierno por defenderlo. O si algo se hizo fue entre bambalinas, quedando de cualquier modo la impresión general de falta de entusiasmo. Hasta el obispo Nevares parecía librado a su propia suerte. Y al decir la "Iglesia argentina" no miremos hacia arriba, hacia los obispos, si es que seguimos repitiendo hasta el cansancio que todos somos Iglesia.

"SU SEÑORÍA ILUSTRISIMA"

"El juez requirió al arzobispo un nuevo informe en este sentido, emplazándolo por

24 horas para contestar". El arzobispo plantea la incompetencia del juez y pide la revocatoria de la medida anterior, recursos que son denegados por el juez, quien nuevamente emplaza al prelado para que responda en el término de **2 horas**. Veinticuatro horas, dos horas, con perspectiva de aplicarle de dos meses a dos años de prisión. Aquí no podemos disimular la sensación de que se ha caído en el ridículo, para ser benignos con el juez. ¿Había de por medio un homicidio, un asalto a un banco, un peligro inminente de algo? Nada exigía obrar con tanta prisa; más aún, la delicada naturaleza del asunto imponía la máxima circunspección. El juez presupone que hay desacato cuando, en realidad, el arzobispo se ha limitado a plantear una cuestión de competencia, previa a la obligación o no de responder. El juez pretende invertir el orden natural y lógico de la cosa, exigiendo que primero se le obedezca y después se vea si había obligación o no de obedecerle. Sería una obediencia absurda y, por ello mismo, inmoral.

El juez niega la apelación por improcedente. En un asunto que interesa a toda la Iglesia correntina y del país y que afecta a las relaciones Iglesia-Estado en general, pretende un funcionario judicial transformar su instancia de primera en última; olvida que su función se inserta en una estructura integral balanceada, con diferentes niveles de interpretación (juez-cámara-tribunal superior-corte suprema). Olvida que toda justicia humana es imperfecta, que la noción de justicia es correlativa con la de injusticia, y que la multiplicidad de niveles de instancia apunta a que la proporción de injusticia que acompaña a todo ejercicio del poder de juzgar pueda quedar asumida en una proporción superior de la justicia que se logre ejercer. Negarle al arzobispo la posibilidad de apelar y encañonarlo con la disyuntiva de responder contra su conciencia o ser tratado como un delincuente, es alterar las proporciones y favorecer que la parte de injusticia pueda llegar a prevalecer sobre la de justicia, desvirtuando entonces el sentido mismo del poder judicial en una sociedad que se confía a él después de una larga experiencia de toda la humanidad.

El juez, doctor Otero, al no tener respuesta a su requerimiento, ordena la **inmediata** detención de "su **señoría ilustrísima**, arzobispo de Corrientes, monseñor Francisco Vicentín". Se ve que el juez no ha leído la declaración de los obispos argentinos (San Miguel, 1969), donde, por

ejemplo, dicen que quieren evitar "un **lenguaje inadecuado** a nuestro tiempo, que separa de nuestro pueblo (giros arcaicos, plural mayestático, etc.)" y "los **títulos honoríficos** que no concuerdan con la sensibilidad contemporánea" (III. Pobreza). Pero ya que el juez se dobla la puntilla para aparecer respetuoso e imparcial, transijamos con su terminología y preguntémosle: ¿Ha reflexionado el señor juez sobre el origen de ese protocolo que considera debido? ¿O nace de una costumbre moralmente sancionada por la sociedad o de un derecho acordado por los poderes públicos o de ambos. La expresión de "señoría ilustrísima" le ha sido acordada al arzobispo —sea por costumbre o por derecho— como un reconocimiento a la función espiritual que desempeña en la sociedad. Implica que el tratamiento de su persona involucra a toda la comunidad cristiana que se mayoritaria en el país. Significa que su persona, por la función que desempeña, no puede ser considerada individualmente como la del ciudadano número 4.901.527. Y esa diferencia hacia una persona que cumple una función espiritual trascendente no es compatible con la **detención inmediata** sin posibilidad de apelación también inmediata. O las palabras significan algo o hemos caído en la hipocresía del formalismo protocolar.

UN JUEZ "PREVISOR"

"Si ejerzo la magistratura —dice el juez— es por entender que poseo el **coraje civil** para desempeñarme". En verdad, el doctor Otero ha dado muestras de un gran coraje; se jugó el puesto, el prestigio y aún la integridad física frente a elementos exaltados que quieren "rectificar" a la justicia por su propia mano, y esto por el cumplimiento de lo que consideraba su deber. Ante su valentía moral no queremos ocultar, con ánimo sereno, una cierta admiración. Pero tampoco queremos ocultar algo que pensamos, y es que para ejercer una magistratura se requiere tanto coraje civil como **prudencia civil**, o, digamos, prudencia humana, para no caer en una dicotomía de valores como si la prudencia "civil" fuera una virtud diferente de la prudencia en general. Y tanto si entendemos la "prudencia" en su sentido clásico latino como en sentido existencial y cristiano, juzgamos que esta virtud no ha brillado tanto, en el presente caso, como la del coraje. Etimológicamente, "prudente" significa "**previsor, que sabe de antemano**", y nos preguntamos si el juez sabía de antemano lo que iba a ocurrir, es decir, que en vez de obtener para el sacerdote Marturet la debida libertad

de culto, lo dejó en situación de no poder ejercer el culto, al menos momentáneamente. También significa el término prudencia una especie de **término medio** entre extremos, dándose como sinónimos: "discreción, ecuanimidad, medida, mesura". Y podríamos preguntarle al señor juez por qué eligió una de las soluciones extremas entre las varias que se ofrecían como alternativas. Entre el extremo de declararse incompetente sin más y el otro extremo de reclamar toda la competencia, se da el término medio de buscar un esclarecimiento de la competencia en un asunto (religioso-civil) que, a más de delicado, es sumamente complejo y que no ha encontrado, en nuestra jurisprudencia argentina, soluciones satisfactorias para todos los interesados.

Y, por último, si bien no podemos exigirle a ningún funcionario el ejercicio de la prudencia en sentido cristiano, comprendemos cuánta distancia hay entre la fría concepción de la justicia, con sabor kantiano, que interpreta el cumplimiento de las leyes como un valor en sí como si las leyes estuvieran sobre el hombre y la comunidad, y el sentido cristiano que interpreta a la justicia como "salvación del hombre" sin dejarlo perecer en la maquinaria de las leyes. La prudencia acepta el presupuesto de que se da una inadecuación esencial entre la ley positiva humana en cuanto generalización estandarizada y la situación concreta de cada hombre que rebasa el esquema legal universal, dado que cada hombre es irrepetible o que la persona es "inefable" como gustaban decir en la edad media. Y finalmente sabe el cristiano que sin un don del Espíritu Santo —que puede ser concedido tanto a creyentes como a no creyentes que obran con sincero corazón—, es decir, sin una capacidad de interpretación del hombre desde el punto de vista de la justicia salvadora de Dios, se puede transformar a la justicia humana en una máquina impersonal, lo que equivale a decir inhumana.

IGLESIA UNIDIMENSIONAL

Todo este episodio nos podría ofrecer material para otras diversas consideraciones como, por ejemplo, el sentido de la obediencia exigida ciegamente al jefe de policía para ejecutar la orden de detención del arzobispo, la posición del gobernador en el conflicto o la resolución del tribunal superior de justicia de Corrientes; pero el espacio de la revista y la paciencia del lector —aún la paciencia en sentido cristiano— nos llevan a concluir, retornan-

do al planteo que nos parece más fundamental: el religioso. Y al decir religioso no entendemos sola ni principalmente canónico. Sobre si el sacerdote Marturet quedó o no excomulgado, hay especialistas que se ocupan del asunto y que no siempre pueden pronunciarse definitivamente por carecer de acceso a las fuentes directas de información. Pero, en realidad, poco hemos ganado con dilucidar si quedó o no excomulgado. En cualquiera de ambas alternativas el problema sigue insoluble. La excomunión, real o supuesta, no pasa de ser un síntoma y consecuencia del desentendimiento entre un sacerdote y su obispo. Mentalidades diferentes no han encontrado los caminos del diálogo y de la comprensión. Para muchos Pastores de la Iglesia, los sacerdotes del "**Tercer Mundo**" —entre los que se cuenta el Padre Marturet— resultan un enigma más incomprensible que el de la esfinge. Tal vez no siempre se les ha ofrecido a dichos Pastores la posibilidad y la facilidad de comprender el movimiento tercermundista. Cierta agresividad antiepiscopal, que condimenta algunas declaraciones públicas, produce su efecto no sólo sobre el corazón sino también sobre la mente, inhibiéndola para desarrollar un esfuerzo de comprensión en ocasiones muy meritorio.

Mientras algunos están aún estudiando y procurando aplicar los documentos del Concilio, otros han saltado ya a los de Medellín y a la arrolladora bibliografía suscitada por la "*Populorum Progressio*", o, mejor dicho, buscan aplicar el Concilio en sus últimas prolongaciones doctrinales. Mientras unos concentran sus energías en la reforma litúrgica, otros lo hacen sobre la estructura interna de la Iglesia. Los primeros han redescubierto el sentido del **culto**, los segundos el de la **libertad cristiana**; y un tercer grupo, el del **compromiso cristiano**, entre los que cuenta el movimiento tercermundista. Vivimos así en una especie de **Iglesia tridimensional**, donde, si falta el diálogo terminaremos en tres Iglesias unidimensionales al estilo de la concepción marcusiana. El año pasado, en San Miguel, se comprometieron nuestros obispos al **diálogo**, incluso **institucionalizado**, mediante la creación de los Consejos presbiteral y pastoral. Si en los meses que han corrido no se han logrado todos los resultados que en aquel momento esperamos, fue tal vez porque no llegamos a evaluar todas las dificultades que el cambio implicaría. En todo caso, el compromiso de los obispos sigue en pie, y de nosotros depende en gran medida el que sepamos darles ánimo para realizarlo. ♦